

«PRUEBA SOBRE LA PRUEBA», PROTECCIÓN DE TESTIGOS MENORES, OBJETO Y MOTIVACIÓN DEL VEREDICTO Y CONTROL DEL JUICIO DE INDICIOS EN EL PROCESO PENAL*

Fernando Gascón Inchausti

José Manuel B. L. c. Ministerio Fiscal y acusación particular.

Tribunal Supremo (Sala de lo Penal).

Sentencia de 26 de junio de 2000.

Recurso de casación contra la Sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (procedimiento ante el Tribunal del Jurado).

Magistrado Ponente: Joaquín Delgado García.

Abogados: no constan.

Hechos y cuestiones jurídicas

Un Tribunal del Jurado constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial de Huelva condenó a José Manuel B.L. a dos penas de prisión de veintisiete y veintiséis años, respectivamente, por los delitos de asesinato y parricidio con alevosía cometidos sobre las personas de su esposa –de la que se hallaba separado– y de su hija de once años. Para la formación del veredicto de culpabilidad fue decisivo el testimonio de otro de sus hijos, Pablo B.V., de corta edad (cuatro años), quien declaró haber visto a su padre la noche de autos en el piso donde vivían las personas asesinadas. La sentencia fue recurrida en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que la confirmó íntegramente. Frente a esta segunda resolución se interpone recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Son cinco las cuestiones fundamentales que se someten a la consideración de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: *a)* el rechazo del Magistrado Presidente durante la instancia a la práctica de una prueba pericial psicológica destinada a comprobar el grado de fiabilidad del testimonio del hijo menor; *b)* el hecho de que la declaración de éste no se efectuara en la sala de vistas, en presencia del Jurado y del acusado, sino en una habitación contigua, aunque con el apoyo de un circuito cerrado de televisión; *c)* la negativa a la inclusión de ciertos extremos en el objeto del veredicto; *d)* la ausencia de motivación fáctica del veredicto; *e)* la infracción de los requisitos de los que depende la posibilidad de sustentar una sentencia de condena en la denominada «prueba de indicios».

Fallo

* Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2000, publicado en *Tribunales de Justicia*, 2001-3, pp. 88-101.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo rechaza la concurrencia de todas las infracciones denunciadas y dicta sentencia desestimatoria del recurso interpuesto.

COMENTARIO

Son muchas y de índole muy variada las cuestiones que suscita la lectura de una sentencia como la presente con la que, en términos generales, hemos de manifestar un alto grado de conformidad: y es que se ofrece en ella una respuesta razonable y, sobre todo, sensata a los diversos problemas que parece plantear la sentencia de un Tribunal del Jurado en un asunto ciertamente dramático. A título general, tan sólo merece reproche el que, una vez más, a lo largo de su sentencia la Sala Segunda del Tribunal Supremo ignore completamente la resolución dictada en apelación por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, a pesar de que, según la Ley, es esta resolución la que es objeto de recurso, y no la dictada en la instancia (sobre esta cuestión, sin embargo, no insistiremos ahora, siendo suficiente con remitir al lector al trabajo, publicado en esta misma revista, de MONTERO AROCA, “Ámbito del recurso de casación en el proceso especial ante el Tribunal del Jurado (con ocasión de la STS, Sala 2ª, de 24 de febrero de 1998)”, *Tribunales de Justicia*, 1998, 8-9, págs. 831 y sigs.).

Para el análisis de cada una de las cuestiones de interés, nos ceñiremos al orden en que las aborda la presente resolución, que es también el que corresponde a cada uno de los motivos en que se fundó el recurso de casación por infracción de precepto constitucional (al amparo del art. 5.4 LOPJ).

1º. *El rechazo de una “prueba sobre la prueba”.*

El primer motivo del recurso denuncia el rechazo por parte del Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado a la práctica de una prueba pericial psicológica sobre la persona del hijo del acusado, que tenía cuatro años cuando ocurrieron los hechos enjuiciados y que declaró haber visto a su padre en la vivienda la noche en que se perpetraron los asesinatos; en concreto, se pretendía un informe que versara –*grosso modo*– sobre la capacidad del menor de reproducir fielmente hechos pasados, sin confundirlos con otros no vividos e imaginados, atendiendo a su personalidad, su madurez cronológica y al tiempo transcurrido entre el hecho delictivo y la primera declaración inculpativa del menor (dieciséis meses).

Antes que otra cosa, se ha de poner de relieve que nos hallamos ante lo que en otro lugar hemos denominado «prueba sobre la prueba» (cfr. GASCÓN INCHAUSTI, *El control de la fiabilidad probatoria: «Prueba sobre la prueba» en el proceso penal*, Valencia, 1999, *passim*), esto es, ante una actividad cuya finalidad consiste en tratar de convencer al órgano jurisdiccional de que la eficacia que merece un determinado medio de prueba debe aumentar, disminuir o incluso desaparecer en el proceso de libre valoración probatoria que precede a la sentencia. Lo que distingue a este tipo de pruebas, por tanto, es la finalidad que

con ellas se persigue y aquello que constituye su objeto. En cuanto a su *finalidad*, la prueba sobre la prueba busca –según convenga a quien la proponga– o bien reforzar la eficacia de ciertos medios de prueba aparentemente débiles, o bien disminuirla o anularla: esto segundo es precisamente lo que ocurrió en el supuesto que nos ocupa, pues a través del informe pericial se esperaba poder demostrar la escasa fiabilidad del menor como testigo. Y su *objeto*, como el de toda actividad probatoria, lo constituyen hechos y máximas de experiencia, pero que no forman parte del objeto del proceso, son ajenos por sí solos al hecho punible que se está enjuiciando: en efecto, en este caso se trataba de medir en abstracto extremos como la fiabilidad de la memoria del testigo o su inclinación a la elaboración fantástica de hechos no vividos, que en sí mismos no forman parte del objeto del proceso penal, pero que resultan de gran utilidad al juzgador a la hora de valorar el testimonio.

Es evidente que la actividad en que la prueba sobre la prueba consiste puede resultar de primera necesidad en un proceso penal: de hecho, su valor será inversamente proporcional al número de pruebas directas de que disponga el juzgador; no es preciso efectuar especiales esfuerzos argumentativos para poner de relieve cómo en casos como el resuelto en la presente sentencia, en que las pruebas de cargo eran escasas y en buena medida indiciarias, su grado de fiabilidad reviste una importancia vital, pues el mandato constitucional de respetar la presunción de inocencia prohíbe condenas fundadas en pruebas de eficacia dudosa –en la medida en que no resulta admisible una valoración probatoria que resulte contraria a las reglas de la lógica y de la experiencia (cfr. VEGAS TORRES, *Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal*, Madrid, 1993, págs. 157 y sigs.)–. Así lo reconoce la Sala Segunda del Tribunal Supremo en la presente sentencia, cuando señala que “la mencionada prueba era pertinente *por referirse a una cuestión importante en el proceso* como lo era la credibilidad del testigo Pablo B.V., *en correlación con la indudable importancia que este testimonio ha tenido* a lo largo del proceso y finalmente en la condena del acusado. Es correcto proponer prueba psicológica sobre los rasgos de la personalidad de un determinado testigo, pues ello *puede servir de ayuda al órgano judicial* a la hora de realizar una tarea, a veces tan complicada, como lo es precisar si una persona ha de ser o no creída en cuanto al contenido de las declaraciones que presta en un proceso” (las cursivas son nuestras).

A pesar de sus peculiaridades, no puede negarse que la prueba sobre la prueba no es sino una manifestación más del género de la prueba; y, en cuanto tal, la tutela del derecho a su práctica debe articularse, en principio, por los cauces genéricos para la tutela del derecho a la prueba. Por ello, en este caso, lo más lógico hubiese sido denunciar el rechazo indebido a la práctica de esta prueba por la vía de un recurso de casación por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 850.1º LECrim (“Cuando se haya denegado alguna diligencia de prueba que, propuesta en tiempo y forma por las partes, se considere pertinente”). Ocurre, sin embargo, que por su objeto y finalidad, la prueba sobre la prueba

también pone en jaque otros derechos fundamentales, como el derecho a no padecer indefensión, el derecho a un proceso con todas las garantías –en su faceta de derecho a someter a contradicción las pruebas propuestas de contrario– y el derecho a la presunción de inocencia. Quizá sea ésta la razón por la que, en el presente caso, se acudió al art. 5.4 LOPJ para fundar el recurso de casación, y no al art. 850.1º LECrim. El error, en cualquier caso, no parece tener mayores repercusiones pues deriva, en buena medida, de la desafortunada redacción del art. 5.4 LOPJ –que se ha trasladado, tras la entrada en vigor de la nueva LEC (D.F. 12ª), al art. 852 LECrim–, que permite un solapamiento de los motivos al olvidar que la LECrim también se ocupa de la tutela en casación de ciertos preceptos constitucionales: en concreto, la propia constitucionalización del derecho a la práctica de las pruebas pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE) absorbe buena parte de las disposiciones del art. 850 LECrim y abre paso a una perturbadora bifurcación en el acceso a la casación cuando se trata de la denuncia de infracciones en materia probatoria. Sea como fuere, lo realmente importante es que el litigante acuda a una vía procesal que permita el control por el Tribunal Supremo del rechazo a la práctica de la prueba, y el elegido en este caso ha resultado eficaz a tal propósito.

Pues bien, desde la perspectiva del derecho a la práctica de los medios de prueba, la Sala Segunda considera que la pericial psicológica propuesta era plenamente pertinente –pues se refiere a un hecho que es de indudable trascendencia para el proceso, aunque no se trate de uno de los hechos justiciables–. La consecuencia lógica de tal premisa habría de ser la estimación del recurso; no es esto, sin embargo, lo que hace la sentencia comentada: el derecho a la prueba no es incondicionado y, en el presente caso, concurría una poderosa razón para enervarlo, como era la protección del interés del testigo menor. En efecto, si en la instancia el Magistrado Presidente rechazó la práctica de la prueba pericial propuesta, no fue por error al juzgar sobre su pertinencia, sino por considerar que podría ocasionar perjuicios psicológicos al menor, derivados del examen a que lo someterían dos peritos nuevos, y todo ello partiendo de la delicada situación en que ya se encontraba aquél tras la muerte de su madre y de su hermana. Y esta decisión del Magistrado no fue arbitraria, sino que se fundaba, a su vez, en otros informes periciales que alertaban del riesgo para la salud mental del menor si era sometido a examen por personas diversas de los psicólogos que le venían tratando.

La Sala Segunda acoge esta argumentación y considera conforme a Derecho anteponer la defensa de la salud del menor al derecho a la prueba del acusado: ante semejante conflicto de intereses, considera que nuestro Ordenamiento ha de inclinarse por hacer prevalecer al primero. Se trata, sin duda, de la opción correcta, aunque no deben desconocerse sus consecuencias: la protección de la salud del menor impide que éste vaya a ser objeto de un concreto medio de prueba, pero no puede dejar de tener relevancia en el proceso el hecho de que una de las partes –máxime cuando es la acusada– pretendió poner en tela

de juicio su credibilidad y que, si no se han efectuado actividades probatorias orientadas a tal fin, no se debe a lo impertinente o inútil de aquéllas, sino a la necesidad de tutelar al menor: este dato también debe ser tenido en cuenta por el juzgador a la hora de valorar la prueba y, en el caso del juicio por jurados, ha de poder ponerse en su conocimiento por la parte interesada –por si pudiera ejercer algún tipo de influencia en el juicio–.

En cualquier caso, en el supuesto enjuiciado por la presente sentencia, la decisión del Magistrado Presidente no habría de tener los drásticos resultados expuestos: porque ya se contaba en el proceso con otros elementos probatorios que versaban sobre el mismo extremo –la credibilidad como testigo del menor–: en concreto, se disponía del informe emitido por los psicólogos que venían tratando al menor desde el inicio, así como de las declaraciones de los profesores del colegio al que asistía el niño. No había, por tanto, vacío probatorio sobre tal circunstancia, por lo que la decisión del Magistrado Presidente, confirmada por el Tribunal Supremo, en definitiva, condujo a que la limitación del derecho a la prueba –forzada por la necesidad de atender a la tutela del menor– se redujera a una privación de la facultad de elegir a los peritos que habrían de elaborar y emitir el informe. De hecho, tampoco puede descartarse que esta circunstancia –es decir, el hecho de que ya obraran en autos pruebas relativas a la fiabilidad del menor– haya sido un factor determinante en la decisión del Tribunal Supremo de inclinar la balanza en favor de la protección del menor frente al derecho a la prueba de descargo del acusado.

Para concluir ya con esta parte de la sentencia, tan sólo queremos poner de relieve lo afortunada que ha resultado a estos efectos la previsión del art. 36.1.e) LOTJ, al permitir, como cuestión previa al juicio, que –de modo previo a la decisión del Magistrado Presidente sobre admisión de la prueba– tenga lugar una impugnación de las pruebas propuestas de contrario, con el consiguiente debate en el que incluso se pueden practicar otras pruebas que versen sobre las circunstancias alegadas de contrario o a favor para lograr la admisión probatoria –como ocurrió en el caso que nos ocupa con el informe aportado por la acusación particular para fundar los riesgos que un examen psicológico efectuado por nuevos peritos supondría para la salud mental del menor–. Se trata, sin duda, de una contribución positiva de la Ley del Jurado que merecería extenderse a los demás procedimientos penales.

2º. Las medidas de protección al testigo menor.

El segundo motivo del recurso denuncia la anomalía de la forma en que se produjo la declaración del testigo. En concreto, previa autorización de las partes y de los miembros del Jurado, el Magistrado Presidente acordó que la declaración se prestara en una sala contigua a la de vistas: en dicha sala contigua, junto con el menor, se hallarían el Magistrado Presidente, el Secretario, el Fiscal y los letrados de acusaciones y defensas; en la sala de vistas quedaron los miembros

del Jurado y el acusado, que pudieron ver y oír las declaraciones del testigo a través de un circuito cerrado de televisión.

No puede negarse que no es la forma ordinaria de prestarse un testimonio y que en el momento en que se produjo ni siquiera tenía cobertura legal expresa – aunque poco después, tras la reforma de la LECrim por la L.O. 14/1999, ha pasado a estar prevista por los arts. 448 III y 707 II–. El principal reproche que puede efectuársele, en cualquier caso, es que produce una quiebra en la inmediación, aunque parcial: en efecto, se restringe la inmediación respecto de los jurados, que son los llamados primordialmente a valorar la prueba, y que no están físicamente presentes en el momento de la declaración; pero tal quiebra no tiene lugar respecto del Magistrado Presidente (que también está llamado a efectuar una valoración probatoria para decidir si disuelve anticipadamente el Jurado por ausencia de prueba de cargo al amparo del art. 49 LOTJ –cfr. en este sentido DE LA OLIVA SANTOS, *Comentarios a la Ley del Jurado*, Madrid, 1999, págs. 43-47–). No obstante, debe reconocerse que los jurados presenciaron “en tiempo real” las manifestaciones del testigo a través de un circuito cerrado de televisión, lo cual –sin llegar a equivaler a una presencia directa– supone una atenuación clara del quebrantamiento de la inmediación.

Sin embargo, no estamos tan seguros de que, a pesar de lo sostenido por el Tribunal Supremo, pueda hablarse también de una quiebra de la inmediación respecto del acusado. Es cierto que tampoco él estaba en la misma sala cuando se produjo la declaración del menor; no obstante, resulta discutible que la presencia del acusado cuando se practican las pruebas guarde relación con la inmediación en sentido estricto, pues el acusado no está llamado a emitir resolución alguna fundándose en las actuaciones presenciadas por él de forma directa. Más bien nos inclinamos a considerar que lo que está en juego es la propia publicidad del proceso y, sobre todo, el fundamento de la obligatoriedad de la presencia del acusado en el juicio oral, que enlaza con las limitaciones impuestas por nuestro Ordenamiento a los juicios en rebeldía.

En cualquier caso, y aunque limite la inmediación respecto de los jurados y el derecho-deber del acusado a presenciar todas las diligencias del juicio, es un proceder que resulta admisible, dado, una vez más, el superior interés del menor: en efecto, si se optó por la declaración separada de éste fue para paliar el peligro de que el testigo padeciera un impacto psicológico negativo, pues ignoraba que su padre estuviera preso y acusado del asesinato de su madre y de su hermana. De nuevo, por tanto, la tutela de la salud mental del menor se considera como interés que debe prevalecer sobre otras garantías propias del proceso penal, cuya limitación no puede considerarse óbice para la validez del proceso y la eficacia de la sentencia a que se llegó en él. Este criterio se ha visto, además, refrendado por el legislador quien, a través de la reforma operada en la LECrim por la L.O. 14/1999 de 9 de junio, introdujo nuevos párrafos –entre otros– en los arts. 448 y 707: en virtud del pfo. II de este último, «cuando el testigo sea menor de edad, el Juez o Tribunal podrá, en interés de dicho testigo y mediante resolución

motivada, previo informe pericial, acordar que sea interrogado evitando la confrontación visual con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico o audiovisual que haga posible la práctica de esta prueba». Aunque la norma no estuviera en vigor en el momento de prestarse la declaración, sí que lo estaba cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia; y, a pesar de que las normas procesales no tienen como regla eficacia retroactiva, hubiera resultado cuando menos chocante una anulación del juicio por un proceder que, pocos meses después de acaecido, contaba con respaldo legal expreso.

Además, resulta paradójico que la defensa del acusado denuncie la irregularidad de la declaración testifical cuando la medida se practicó con autorización de las partes (así lo dice la sentencia), y dándose además la circunstancia de que el propio abogado defensor renunció a interrogar al menor – lo cual es indicio de que reconocía su fragilidad emocional– e incluso a comunicarse con su cliente para que éste le indicara la conveniencia de hacer alguna pregunta.

Si se tiene en cuenta lo anterior, así como lo manifestado con ocasión del motivo anterior del recurso, se puede concluir cómo para nuestro Ordenamiento el concepto de “protección al testigo” ha sufrido una interesante evolución: se ha pasado de la simple búsqueda de su seguridad física y de la de su entorno –para lo que se promulgó la Ley 19/1994 de protección a testigos y peritos en causas criminales– a la garantía también de su integridad psíquica, que se pone especialmente de manifiesto cuando el testigo es menor de edad. Se asume con ello que los riesgos y amenazas para el testigo no tienen por qué proceder del inculpado y de su entorno criminal, sino también de la existencia del propio proceso y del modo en que se desarrollen los acontecimientos durante el juicio oral. Por eso mismo, no podrá descartarse en el futuro la extensión de las novedades introducidas por la L.O. 14/1999 a sujetos que se encuentren en situación análoga de fragilidad o riesgo emocional –especialmente, personas incapacitadas o incapaces *de facto*–, superando con ello el tenor de preceptos como los arts. 448 III, 707 II o 713 II LECrim, que se refieren expresamente a los menores de edad.

3º. *La elaboración del objeto del veredicto.*

Como es sabido, en el procedimiento ante el Tribunal del Jurado uno de los momentos clave –aunque peor regulados en la Ley– es el de la elaboración del denominado «objeto del veredicto» (art. 52 LOTJ), en el cual el Magistrado Presidente ha de expresar por escrito los hechos que el Jurado deberá declarar probados o no, tanto los que constituyen el objeto principal de la acusación como los relativos a las eventuales causas de extensión de la responsabilidad, al grado de ejecución del delito, participación del acusado y a la modificación de la responsabilidad. A tal fin, el Magistrado Presidente elaborará una primera propuesta de escrito conteniendo el objeto del veredicto, de la que se dará traslado a las partes, de modo que puedan éstas solicitar las inclusiones o

exclusiones que estimen pertinentes (art. 53 LOTJ): el Magistrado resolverá de plano las que admite y las que rechaza, y seguidamente hará entrega del escrito al Jurado en audiencia pública, instruyéndoles al tiempo de los extremos previstos por el art. 54 LOTJ (en general, sobre estos preceptos, cfr. DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ y AGUILERA MORALES, en *Comentarios a la Ley del Jurado*, coord. DE LA OLIVA SANTOS, *cit.*, págs. 501-555).

Pues bien, en el caso que nos ocupa la defensa del acusado pretendió en tal trámite la inclusión en el objeto del veredicto de dos extremos, intentando con ello que se sometiera a la consideración del Jurado si se habían investigado suficientemente o no dos líneas de defensa favorables al acusado: en concreto, la posible presencia en la ciudad de Huelva la noche de los asesinatos de otras dos personas que podrían también haber tenido algún motivo para su perpetración.

El Magistrado Presidente rechazó la inclusión de semejantes asertos en el escrito, y el Tribunal Supremo viene a confirmar su decisión. Entiende la Sala Segunda que con ello está pretendiendo la defensa del acusado que el Jurado controle o censure hasta qué punto la labor investigadora efectuada durante la instrucción fue o no exhaustiva y agotó todas las posibilidades antes de concluir con la imputación formal de los asesinatos a su patrocinado; y eso, a juicio del Tribunal, ni es ni puede ser función del Jurado, quien está llamado tan sólo –y no es poco– a proclamar si son ciertos o falsos los hechos afirmados por las partes y a emitir, en consecuencia, un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad –sin olvidar tampoco que en este procedimiento está completamente vedado el acceso de los juzgadores al material generado durante la instrucción, lo que les impediría formular una crítica fundada a las actividades llevadas a cabo en esa fase del proceso–.

Pero no es sólo que, como acertadamente dice el Tribunal Supremo, lo que se pretendía era atribuir al Jurado una función para la que carece de competencia. Se trata, más aún, de que los extremos cuya inclusión se reclamó eran totalmente impertinentes, puesto que se salían del objeto del proceso tal y como había quedado definido tras la instrucción, en el auto de hechos justiciables y en los escritos de calificaciones de las partes: la suficiencia de la investigación sobre la presencia durante la noche de autos en la ciudad de otros posibles sospechosos no es un hecho que estuviera siendo objeto de enjuiciamiento en ese concreto proceso penal y tampoco es un hecho que debiera influir sobre el contenido del veredicto; si acaso, podría haberse intentado incluir en el objeto del veredicto la presencia o no en sí de dichas personas, como forma de sembrar en el Jurado lo que, acudiendo a la terminología angloamericana, se conoce como “duda razonable”. Pero, desde luego, tal y como se pretendió su inserción, debe rechazarse que fuese procedente.

En cualquier caso, hay que recordar a la defensa del acusado que el momento oportuno para la investigación de otras posibles hipótesis de explicación de lo acontecido es la fase de instrucción del proceso. No se puede

negar que la regulación que de esta fase ha efectuado la LOTJ es claramente defectuosa, pues ha privado de iniciativa al Juez de Instrucción, sin compensar tal privación con un aumento de los poderes del Ministerio Fiscal (cfr. DE LA OLIVA SANTOS, *Comentarios a la Ley del Jurado*, cit., págs. 27-40); aunque es, sin embargo, igual de cierta la voluntad legislativa de reforzar la iniciativa de las partes en la investigación (cfr. art. 27 LOTJ), que debió haber sido aprovechada por la defensa del acusado para forzar un examen de la posible implicación de terceras personas en el delito –siempre que fuese razonable hacerlo, a la luz de los indicios de que se dispusiera–; sea como fuere, el momento de elaboración del objeto del veredicto es demasiado tardío para criticar una desidia investigadora que, contando con el diseño de la instrucción en el proceso por Jurado, es en parte imputable a quien pretende denunciarla.

4º. La motivación del veredicto.

Como fundamento para sostener la procedencia de la casación interpuesta alega también el recurrente la ausencia de motivación del veredicto del Jurado. Se trata, en definitiva, de la denuncia del incumplimiento del art. 61.1.d) LOTJ, cuando ordena a los jurados hacer constar en el acta de la votación los elementos de convicción a que han atendido para declarar los hechos como probados y no probados, formulando a tal fin una explicación sucinta de sus razones.

No es, en cualquier caso, la primera ocasión en que esta cuestión se le plantea a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, quien rechaza la concurrencia de la infracción denunciada en el caso concreto y aprovecha para sintetizar cuál es su doctrina al respecto:

— En primer término, y sirviéndose de la abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el alcance del deber genérico de motivación de las resoluciones judiciales, insiste la Sala Segunda en que el art. 24.1 CE, puesto en relación con el art. 120.3, no exige “explicaciones amplias o de una determinada extensión”, “siempre que sean suficientemente expresivas para dejar de manifiesto el porqué de lo resuelto, para que quede claro que no se trata de una decisión arbitraria” –lo que, en el ámbito del proceso penal, supondría una conculcación de la presunción de inocencia–.

— Tratándose de procesos por Jurado, es suficiente que los apartados A –hechos probados–, B –hechos no probados– y D –prueba utilizada– del acta de votación se puedan poner en relación con el objeto del veredicto para que se pueda conocer la prueba de cargo utilizada para condenar y el veredicto se considere, por consiguiente, suficientemente motivado: es bastante, por tanto, una justificación somera del veredicto, consistente en la simple enunciación de los medios de prueba que han sido tenidos en cuenta para que el Jurado tuviese como probado o como no probado cada uno de los hechos enumerados en el objeto del veredicto. Considera el Tribunal Supremo –y no le falta razón– que no puede exigirse más de unos jueces legos, que carecen de la experiencia necesaria para efectuar una correcta justificación fáctica de sus decisiones. Precisamente por esa

razón, la explicación sucinta que se deriva del acta de votación ha de ser desarrollada y detallada en la sentencia por el Magistrado Presidente, quien sí se halla capacitado para proceder a un estudio más minucioso de la prueba y de los indicios utilizados, que sirva para explicar la condena y permita el control de su razonabilidad por los Tribunales superiores en vía de apelación, casación y, en su caso, amparo.

5º. El control de la «prueba de indicios».

La última de las cuestiones que ocupan al Tribunal Supremo en esta sentencia es la que se refiere a la supuesta infracción de la presunción de inocencia por haberse fundado la condena en unos indicios que se consideran insuficientes.

Sin negar la importancia que reviste en el caso concreto, se trata, sin embargo, de un problema que se plantea con cierta frecuencia, razón por la que ya existe un cuerpo doctrinal relativamente asentado en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y en la del Tribunal Constitucional al respecto, que la Sala Segunda se limita a aplicar en la presente sentencia para llegar a la conclusión de que no tuvo lugar el vicio denunciado.

Como suele ser habitual, la Sala Segunda del Tribunal Supremo incurre en el equívoco de denominar «prueba de indicios» a una actividad que no es en rigor probatoria, posiblemente por los graves reparos que parece suscitar en los penalistas el término «presunción»: lo cierto, no obstante, es que la mal llamada «prueba de indicios» nos sitúa pura y simplemente ante el fenómeno de las presunciones judiciales (cfr. VEGAS TORRES, *Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal*, cit., págs. 141-145) y así viene a asumirlo tácitamente la presente sentencia cuando afirma que la prueba de indicios es “paralela” a la prueba de presunciones del art. 1249 CC, y reconoce también la aplicación del art. 1253 CC cuando habla de “enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano” para referirse a la conexión lógica que ha de darse entre los indicios y el hecho al que se pretende llegar. Más aún, la propia definición que de la «prueba de indicios» ofrece el Tribunal Supremo en la sentencia –a pesar de ciertos defectos conceptuales severos– es un trasunto de la noción tradicional de las presunciones: “una operación lógica que ha de explicar el órgano judicial que la aplica, por medio de la cual se llega al conocimiento de un hecho necesitado de prueba, partiendo de otros hechos, debidamente concatenados con aquél, de tal modo que, una vez acreditados éstos, que por eso denominamos hechos básicos, se puede adquirir razonablemente la certeza de que ese otro necesitado de prueba también ha quedado probado”.

Precisiones terminológicas y conceptuales aparte, únicamente nos limitaremos ahora a recordar la doctrina antes aludida y aplicada por el Tribunal en esta sentencia en relación con la aptitud de la prueba de indicios para servir válidamente de sustento a una sentencia de condena:

— En primer término, es preciso que existan unos hechos básicos completamente acreditados o probados. El órgano judicial de instancia es el único competente para fijarlos como ciertos, de manera que su juicio al respecto sólo puede ser controlado en vía de casación, de la apelación especial del proceso ante el Tribunal del Jurado o de amparo de una forma muy limitada, por lo que toca a la razonabilidad de la valoración probatoria al respecto.

— Y es necesario, en segundo lugar, que exista entre los hechos básicos y el que se pretende deducir un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, esto es, una conexión lógica que permita considerar existente el hecho deducido si se prueba la existencia de los indicios. Esta conexión lógica también es susceptible de un control, aunque limitado, en el marco de los recursos de casación, apelación especial del proceso por Jurado y amparo: los Tribunales superiores habrán de ceñirse a comprobar si el criterio empleado por el juzgador de instancia para afirmar la conexión lógica es o no razonable, esto es, si es o no conforme con las reglas de la lógica y de la experiencia.

En el caso que nos ocupa, el Tribunal Supremo procede a efectuar los dos controles que, según su propia jurisprudencia, le están permitidos. Efectúa así un primer análisis minucioso de los hechos indiciarios, comprobando que resulta razonable que el Tribunal del Jurado los tuviera por ciertos en la sentencia. Aceptado así el criterio del juzgador de instancia sobre la concurrencia de los indicios, pasa a comprobar que efectivamente existe un enlace lógico entre tales indicios y la comisión de los asesinatos por el acusado, que es el hecho presunto en que se funda la sentencia condenatoria; el Tribunal Supremo no sólo considera lógica y razonable la conexión apreciada por el Tribunal del Jurado, sino que llega a considerarla como la única “alternativa razonable” que resulta compatible con los hechos básicos probados. En consecuencia, acaba desestimando el motivo.

Como puede apreciarse, la presente sentencia es buena muestra –entre muchas otras– de la progresiva tendencia del Tribunal Supremo a inmiscuirse dentro de la valoración probatoria efectuada en la instancia, siempre bajo el pretexto del control de la suficiencia de la prueba de cargo y de la razonabilidad de su apreciación. Bien mirados, los párrafos que la Sala Segunda dedica al análisis de la prueba de indicios parecen más propios de una sentencia de segunda instancia que de la sentencia dictada tras un recurso extraordinario en el que se ha comenzado con una proclamación –con vocación de solemnidad– acerca de los límites de su propia tarea en relación con las pruebas. No se trata, en cualquier caso, de una tendencia criticable; antes bien, es consecuencia de la necesidad de que la Jurisdicción ordinaria ofrezca a los justiciables una tutela plena del principio constitucional de la presunción de inocencia.